



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés de enero de dos mil veintitrés

A22-276

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN AUTO
Demandante: **NORBAY ALEJANDRO HENAO**
Demandados: **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-025-2018-00709-01
Decisión: **Modifica** auto que restringe decreto de prueba testimonial.

Link: [22-276 \(025-2018-00709\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la ARL accionada contra el auto que negó el decreto de una prueba.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 1** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

- Pretende el demandante que tras declararse la nulidad de las calificaciones efectuadas en el trámite administrativo, es decir, la emitida tanto por la ARL como las proferidas por las juntas accionadas, se ordene el reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE INVALIDEZ de origen laboral, en acogimiento de los hallazgos de la experticia allegada con la demanda, realizada por la IPS UNIVERSITARIA de la Universidad de Antioquia, según la cual tiene una pérdida de capacidad laboral del 53.38% (superior al 38.04% estimado por la Junta Nacional) con fecha de estructuración del 5 de marzo de 2013 de origen laboral. Igualmente pretende los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

- En el acápite de pruebas, el actor solicitó que se decretara como documental la experticia realizada por la IPS de la Universidad de Antioquia, y como testimonial que se citara al Dr. José William Vargas Arenas para efectos que absolviera las dudas que las partes pudieran tener frente al peritaje aludido.
- Por su parte, al contestar la demanda, AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. solicitó la comparecencia del Dr. José William Vargas Arenas en su condición de autor o perito de la calificación allegada con la demanda, con la finalidad de interrogarlo de acuerdo a lo normado en el art. 228 del CGP. Igualmente anunció que aportaría un nuevo dictamen que dieran cuenta de los yerros contenidos la evaluación incorporada por el accionante. Adicional a lo expuesto, solicitó la comparecencia de seis médicos tratantes del actor, así:

- 4.1 Carlos Mario González- Dirección: Calle 51 No. 45 - 93 Clínica Soma consultorio 306, Medellín.
- 4.2 Jaime Alberto Londoño Restrepo - Dirección: Calle 78b N° 69-240, Medellín.
- 4.3 Sandra Colimon Gómez - Dirección: Calle 16b N°43-79, Medellín.
- 4.4 Jorge Rene Estupiñán Guzmán - Dirección: Calle 16b N°43-79, Medellín.
- 4.5 Camila Valencia Arbeláez - Dirección: Calle 78b N° 69-240, Medellín.
- 4.6 Dr. David Fernando Sarmiento - Dirección: Cra. 42 No. 3 Sur 81 -piso 19, Medellín

En similar sentido, bajo la denominación de *testimonio técnico*, pretende que el despacho reciba la declaración de las 9 personas que enlista, a fin de que expusieran los criterios médicos, científicos y técnicos que se tuvieron en cuenta en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por AXA COLPATRIA, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, el 15/08/2013, 09/10/2013 y 23/04/2014 respectivamente, así como los valores e inconsistencias médicas, científicas y técnicas del dictamen elaborado por la IPS UNIVERSITARIA. Son tales los siguientes:

- 5.1 José Octavio Jaramillo Cardona - Dirección: Av. 15 N° 104 - 33 Piso 2, Bogotá.
- 5.2 Luz Adriana Giraldo Restrepo - Dirección: Av. 15 N° 104 - 33 Piso 2, Bogotá.
- 5.3 Alejandra Isaza Restrepo - Dirección: Av. 15 N° 104 - 33 Piso 2, Bogotá.
- 5.4 Juan Mauricio Rojas García - Dirección: Calle 27 N° 46 - 70, Medellín
- 5.5 María del Pilar Duque Restrepo - Dirección: Calle 27 N° 46 - 70, Medellín
- 5.6 Edgar Augusto Correa Ochoa - Dirección: Calle 27 N° 46 - 70, Medellín
- 5.7 Edgar Humberto Velandia Bacca - Dirección: Calle 32ª N° 19 - 35, Bogotá
- 5.8 Emilio Luis Vargas Pájaro - Dirección: Calle 32ª N° 19 - 35, Bogotá
- 5.9 Luz Elena Cordero Villamizar - Dirección: Calle 32ª N° 19 - 35, Bogotá

- En audiencia del artículo 77 del C.P.T. y la S.S. celebrada el 7 de octubre de 2022, dentro de la etapa correspondiente, la a quo decretó a favor de la parte actora la prueba pericial, en tal sentido, atendiendo la

petición formulada por la ARL, ordenó la comparecencia del Dr. José William Vargas Arenas en su condición de autor de la calificación allegada, para efectos de ser controvertido el dictamen. Igualmente le otorgó a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. un máximo de 20 días para que incorporara al plenario el dictamen a través del cual refutaría la evaluación allegada por el demandante. No obstante, la juez negó el decreto de los testimonios solicitados por la entidad aseguradora, concretamente el referente a los seis médicos tratantes, y circunscribió a uno la recepción de los anunciados como calificadores, decisión contra la que la entidad interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ AL DECIDIR

Expuso que en la contestación de la demanda la ARL solicitó dos grupos de prueba testimonial. Respecto del primero de ellos, se anunció que fueron médicos tratantes del demandante, prueba testimonial que NO DECRETÓ al aducir que aquellas personas estaban amparadas por el secreto profesional en virtud del art. 74 de la Carta Política y lo previsto en el *art. 109 del C.G.P.*, según el cual los médicos, enfermeros, laboratoristas entre otros profesionales NO estaban obligados a declarar sobre aquello que se les había confiado o había llegado a su conocimiento en razón a su profesión.

Frente al segundo grupo, circunscribió a uno la comparecencia de quienes se enunciaron como testigos técnicos (personas que participaron en las calificaciones cuestionadas), dado que la entidad allegaría otro dictamen y en todo caso, en ese evento, concurriría el perito calificador para la sustentación del mismo. Aunado a ello, la a quo destacó que el derecho de defensa se encontraba materializado con la posibilidad tanto de contrainterrogar al médico de la IPS UNIVERSITARIA como la de allegar un nuevo dictamen.

2.2. DEL RECORRENTE AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

Insiste en que debe recibirse el testimonio de quienes elaboraron los dictámenes cuestionados. Aduce que son testigos técnicos, personas que tuvieron conocimiento y realizaron la valoración del demandante en distintas oportunidades, pertenecientes a la Junta Regional de Invalidez de Antioquia y a la Junta Nacional de Invalidez, sin que fuera dable circunscribirlo a uno, dado que el de una entidad NO podía emitir un concepto respecto de lo que dijo la otra y viceversa, de ahí que se estaba cercenando el ejercicio del derecho de defensa que tenía AXA COLPATRIA para efecto de reflejar las inconsistencias que predicaba, especialmente de cara al dictamen aportado por el demandante, debiendo existir la posibilidad de que ambas instancias (Junta Regional y Nacional) explicaran los fundamentos médicos y científicos que les permitieron arribar a las conclusiones científicas contenidas en cada uno de los documentos emitidos, y de paso, responder a los cuestionamientos que a su rigor científico se hacía con la presentación de la demanda, de ahí que fuera fundamental su práctica,

razón por la cual, la forma en la que se había decretado la prueba resultaba insuficiente frente al propósito pretendido.

2.3. ALEGATOS

Ninguna de las partes presentó alegatos.

3. PROBLEMA JURÍDICO:

Consiste en determinar si desde la etapa de decreto de pruebas, es procedente restringir a uno la comparecencia de quienes fueron enunciados como testigos técnicos.

4. CONSIDERACIONES:

En el caso de autos, AXA COLPATRIA pretende que se permita la comparecencia de quienes elaboraron los dictámenes que ahora son cuestionados judicialmente, y consecuencialmente a través de dichas declaraciones se le permita ejercer el derecho de contradicción frente al dictamen pericial que fue rendido por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, allegado con la demanda, nutriéndose de esta manera el debate en cuanto al esclarecimiento del real porcentaje de pérdida de capacidad laboral del afiliado, súplica que NO tuvo eco en la respectiva audiencia de decreto de pruebas, pues aunque se accedió a lo solicitado, se circunscribió su práctica a uno de los nueve pedidos.

Bajo esta óptica se entiende acertado la remisión del expediente, pues ello acarrea la negativa de la práctica de una prueba, siendo competencia de esta corporación resolver lo pertinente al tenor de lo normado en el numeral 4º del artículo 65 del CPT y la SS, según el cual es apelable el auto que niegue el decreto o la *práctica* de una prueba.

En este orden de ideas, demarca el punto de partida lo normado en nuestra codificación. Nos referimos con ello al art. 53 del CPT y la SS, cuyo tenor es:

ARTICULO 53. RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS INCONDUCTENTES. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

En cuanto a la prueba de testigos, **el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.**
(Resaltos de la Sala)

En similar sentido lo estipula el Código General del Proceso, así:

ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.

El juez **podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso.**

(Resaltos de la Sala).

Quiero ello decir que resulta precipitado, bajo cualquier óptica, restringir el medio de prueba decretado, por la simple razón de que si no se ha dado apertura al debate probatorio, mucho menos se podrá tener por esclarecido un hecho, o estimar que existe suficiente ilustración respecto de un punto en controversia. Ahora, esta Magistratura NO pasa inadvertido que la ARL contará con diferentes herramientas para desarrollar su tesis de defensa, incluso los enlista la a quo en sus consideraciones, pero ello NO faculta al operador jurídico a que una vez decretado el medio, limite anticipadamente su práctica.

Y es que la controversia aquí planteada supera el examen tendiente a establecer si el medio de prueba cumple con unos requisitos que garantizan su posterior eficacia (conducencia, la pertinencia y la utilidad), pues mal o bien, la a quo consideró procedente decretarlo; de ahí que NO se espere del *ad quem* un análisis frente a estos aspectos.

Así las cosas, y retomando el norte de este caso, consideramos procedente remitirnos al razonamiento plasmado por el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, quien sobre este punto estimó que:

“Uno de los inveterados vicios de los abogados está en el solicitar múltiples declaraciones, las más de las veces innecesarias, conducta frente a la cual nada pueden hacer los jueces pues a priori no está dentro de sus funciones limitar los testimonios, lo que tan solo pueden hacer, tal como lo indica el art. 212 del CGP si de los ya recibidos considera el juez suficientemente esclarecidos los hechos que se quieren determinar por medio de la prueba testimonial, lo que dispone por medio de auto que no admite recurso alguno, facultad que es de esperar se utilice con mayor frecuencia por ser numerosos los casos donde se justifica hacerlo.

Se observa de lo anterior que si se solicitan varios testimonios en principio el juez debe decretarlos en su integridad; empero, si al ser practicados algunos de ellos, el juez estima que o que con ellos se quiere probar lo encuentra establecido, tiene como valiosa herramienta el inciso segundo del art. 212 del CGP... de manera que le basta al funcionario proferir un auto en el cual únicamente debe mencionar que con las declaraciones recibidas tiene establecido lo que se quiere probar y negar la práctica de los restantes, decisión inimpugnable, de ahí la gran utilidad que reviste, pues si se permitiera cualquier recurso se vendría a erigir en un motivo de dilación del proceso... el control del juez frente al abuso de la prueba testimonial es después de que se ha decretado la práctica de todos los testimonios y una vez evacuados varios es que podría prescindir de los que restan, por estimar la suficiente ilustración...”¹

En cuanto a la limitación del número de testigos Nattan Nisimblat refiere que:

A pesar de que en los sistemas procesales modernos se eliminó el concepto de “tarifa legal”, persiste el concepto de “utilidad”, según el cual si en un proceso el juez cuenta con suficientes testigos que le lleven al convencimiento, deberá limitar la práctica de todos aquellos que no sean necesarios, aunque

¹ Consúltase la obra *Código General del Proceso Pruebas*, 2017. DUPRE Editores Ltda. Páginas 290 y 291.

sean pedidos por las partes (...) el juez podrá limitar la práctica de los testimonios, pero no su decreto (...) cuando se pidan testimonios en exceso el juez deberá decretarlos y reservar la potestad de limitar su práctica para el momento en que considere que los rendidos son necesarios para formar su convencimiento, luego de lo que tratan las normas comentadas es de limitar la práctica, más no su decreto.²

Conforme las consideraciones que preceden, quienes fueron citados como testigos técnicos (en atención a su experiencia, preparación y/o conocimientos especiales en una ciencia), podrán presentarse a la audiencia en la fecha y hora que señale el despacho, cuya comparecencia corresponderá tramitar a la ARL, previa cancelación de los honorarios a los que hubiese lugar, cuyo costo asume esa parte que los citó, sin restricción alguna, empero la *juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.*

Así las cosas, se MODIFICARÁ el auto venido en apelación, en los términos descritos.

Sin costas en esta instancia.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICA la decisión proferida el 7 de octubre de 2022 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín al suprimirse la restricción impuesta al decreto de los testimonios técnicos, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **NORBEY ALEJANDRO HENAO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.629.988 contra la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: sin costas en esta instancia.

² Consúltase la obra *Derecho Probatorio Técnicas del Juicio Oral* actualizado con el Código General del Proceso, Cuarta Edición, 2018. DUPRE Ediciones Doctrina y Ley. Página 393.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 010 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 24 DE ENERO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>